

Mujeres, Paz y Seguridad: Resolución 1325

En esta edición de Múltiples la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es evaluada tanto en el contexto global como en casos específicos de cada país. Nuestro objetivo es mostrar los beneficios y desafíos relacionados con la aplicación de esta Resolución en la paz y seguridad de las mujeres en situaciones de conflicto armado.

La Resolución 1325 ya ha cambiado la forma en que la comunidad internacional piensa sobre cuestiones específicas de género en los conflictos armados, negociaciones y operaciones de paz. Ha visibilizado la importancia de los efectos del conflicto armado sobre las mujeres y ha tenido un impacto en las operaciones de las Naciones Unidas, instituciones militares y agentes no estatales armados. Aunque imperfecta, la Resolución es una importante plataforma política para movilizar esfuerzos de protección, participación de las mujeres en la construcción de paz e iniciativas de reconstrucción sensibles al género.

Loreta Tellería, experta boliviana en mujeres, paz y seguridad, explica el uso de la Resolución 1325 en el contexto latinoamericano, Paola Jiménez analiza la Resolución en el contexto del conflicto en Colombia. Los artículos en inglés incluyen: una introducción general de la Resolución 1325 por Lisa Lachance y Kimberly Inksater, consultoras del JGG; Khadeja Nasr hace algunas observaciones sobre la importancia de la Resolución 1325 en territorios palestinos ocupados; y finalmente, Stephanie Tissot presenta una visión general del Plan de Acción Nacional de Canadá para implementar la Resolución 1325.

Women, Peace and Security: Resolution 1325

In this issue of Múltiples the application of the United Nations Security Council Resolution 1325 is assessed in a global context as well as in country-specific cases. Our objective is to illustrate the benefits and challenges related to the application of Resolution 1325 in women's peace and security in situations of armed conflict.

Resolution 1325 has already changed the way the international community thinks about specific gender issues in armed conflict, peace negotiations, and peace operations. This resolution has highlighted the importance of the effects of armed conflict on women and has had an impact on United Nations operations, military institutions, and non-state armed actors. While imperfect, it is an important political platform for mobilizing protection efforts, women's participation in peace-making and gender sensitive reconstruction initiatives.

Loreta Telleria, a Bolivian expert on women, peace and security, explains the use of 1325 in the Latin American context, while Paola Jiménez examines the resolution in terms of the conflict in Colombia. English articles include: a general overview of Resolution 1325 by JGG consultants Lisa Lachance and Kimberly Inksater; observations, by Khadeja Nasr, on the importance of 1325 in the occupied Palestinian territories; and an overview, by Stephanie Tissot, of Canada's National Action Plan to Implement Security Council Resolution 1325.

Indice/Contents

- 2 Mujer, Paz y Seguridad en América Latina, el desafío de la Resolución 1325
- 4 Women and Peace and Security: UN Resolution 1325
- 6 La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Apuntes sobre su implementación en Colombia
- 8 Canada's Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security
- 10 Application of UN Resolution 1325 in the occupied Palestinian territories la Consulta Previa
- 12 Group News

Mujer, Paz y Seguridad en América Latina, el desafío de la Resolución 1325

Loreta Telleria Escobar

Equidad de género y la Resolución 1325

El avance sostenido de la reivindicación de la equidad de género se ha reflejado en diversos escenarios políticos, económicos y sociales a nivel mundial y regional. La Resolución 1325 de Naciones Unidas (NNUU) emitida el año 2000 viene a contribuir a este avance desde una perspectiva nunca antes tratada, como es la relación entre “mujer, paz y seguridad”. Esta Resolución se convierte en un desafío tanto a nivel del mismo organismo internacional como de los países miembros, debido a que interpela una de las estructuras fundacionales del patriarcado como es la guerra, no sólo para proponer mecanismos que contribuyan a terminar con ella a través de la búsqueda de la paz, sino porque incorpora en su desarrollo a las mujeres, eternas víctimas de los conflictos armados.

Los objetivos de la Resolución 1325 básicamente son tres: a) el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y la toma de decisiones; b) el entrenamiento para el mantenimiento de la paz con perspectiva de género; y c) la condena a la violencia sexual de forma sistemática o generalizada contra las mujeres en conflictos armados. A través de los años NNUU ha aprobado otras resoluciones que mantienen y refuerzan estos objetivos haciendo especial énfasis en el tema de violencia de género (R-1820 (2008), R-1888 (2009), R-1889 (2009), y R-1960 (2010)).

En América Latina, los temas de equidad de género han empezado a cobrar fuerza a partir de la década de los noventa, cuando se observan grandes cambios normativos en cuanto a derechos de las mujeres en ámbitos políticos (leyes de cuotas), económicos (autonomía financiera), sociales e institucionales. En este

último ámbito, es un progreso importante la apertura de las instituciones militares de la región a las mujeres, para ejercer al igual que sus pares varones la carrera militar. Así también es notorio haber contado en la región con ministras de defensa mujeres (Chile, Ecuador, Argentina, Nicaragua y Bolivia), que desde sus perspectivas y ámbitos de trabajo han impulsado una mayor presencia femenina en estas instituciones, incorporando políticas de equidad de género anteriormente inexistentes.

Acciones desplegadas, avances logrados y limitaciones encontradas

La relación entre “mujer, paz y seguridad” formulada a partir de la Resolución 1325, ha desplegado una serie de acciones por parte de NNUU para cumplir los objetivos previstos. Los más importantes han sido la elaboración de Planes de Acción con el fin de articular los postulados de las resoluciones emitidas en la materia, así como la presentación de informes por parte del Secretario General al Consejo de Seguridad, sobre los esfuerzos y avances logrados por las distintas instancias que componen la organización. No obstante, el mismo Secretario General reconoce que a pesar de los avances logrados en cuanto a una mayor participación de mujeres en misiones de paz y la importancia que ha adquirido el tema de género en todo el sistema de NNUU, aún se hace patente la ausencia de un enfoque coherente y coordinado, con metas específicas e indicadores evaluativos sobre el tema, siendo urgente lograr una mayor participación de las mujeres en todas las etapas de los procesos de paz (Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad: S/2010/498).

A nivel de los países miembros, un avance notable producto de la Resolución 1325 ha sido la implementación de Planes de Acción

tendientes a aplicar de manera efectiva los objetivos propuestos. Hasta el año 2011 existían en todo el mundo 24 países con Planes de Acción, de los cuales la mayoría se encontraban en Europa y África y sólo dos en América Latina, Chile y Argentina, éste último con un Plan que se circunscribía sólo al ámbito de defensa, pero que en la actualidad tiende a expandirse a todos los niveles del Estado.

En la región latinoamericana la relación entre “mujer, paz y seguridad” muestra limitaciones importantes. Los datos reflejan que los únicos avances logrados en la materia como la incorporación de mujeres en las fuerzas armadas y marcos normativos contra la violencia de género, aún presentan avances incipientes. En el tema de mujer y fuerzas armadas, observamos que los porcentajes de participación femenina en las instituciones militares de la región alcanza en el mejor de los casos a 16,09% (Uruguay) y en el peor a 0,57% (Bolivia), con un promedio regional de 4% (RESDAL, 2010). Si a esto se suma que al interior de las instituciones militares, aún persiste cierto rechazo al ingreso de mujeres a una institución tradicionalmente patriarcal, el proceso de inclusión femenina aún es un tema pendiente. Por otra parte, a pesar de que NNUU aprobó hace más de once años la Resolución 1325, a nivel internacional la participación porcentual de mujeres en misiones de mantenimiento de paz para la gestión 2011, apenas llegaba a 30% en el personal civil, 9% en la policía y 2% en los militares (ONU, 2011). En el tema de violencia de género, al parecer los problemas permanecen latentes tanto al interior de los países como en situaciones de conflictos armados. Sólo en la República Democrática del Congo se cree que más de 200.000 mujeres han sufrido de violencia sexual desde que se inició el conflicto armado (ONU Mujeres, 2011).

Posibilidad de aplicación de la Resolución 1325

Un estudio realizado por RESDAL el año 2011 en cinco países de la región (Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Uruguay), con el fin de explorar el contexto y las perspectivas que existen en estos países para diseñar e implementar planes nacionales sobre la Resolución 1325, mostró ciertas características relevantes en cuanto a la aplicación de los objetivos que emanan de la Resolución.



Sobre la Autora

Loreta Telleria Escobar es Politóloga, Economista y Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos. Escribió varios artículos académicos sobre fuerzas armadas, policía, defensa y seguridad en América Latina y Bolivia. Es autora del libro “Construyendo una policía comunitaria en Bolivia” y coautora de “Policía en Bolivia: Una política institucional pendiente”. Coordinó el libro: “Límites y Desafíos de la Agenda de Seguridad Hemisférica”. Durante la gestión 2010, se desempeñó como Secretaria General de la de la IX Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Red de Seguridad y Defensa en América Latina RESDAL y actualmente trabaja temas de investigación sobre Mujer, Fuerzas Armadas y Misiones de Paz en la región latinoamericana.

La primera y más fundamental, es la visión reduccionista que se tiene de ésta al tomar en cuenta sólo el segundo y tercer objetivo relacionado con el entrenamiento para el mantenimiento de la paz con perspectiva de género y la condena a la violencia sexual contra las mujeres en conflictos armados, se deja de lado un objetivo fundamental como es el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de paz y la toma de decisiones. Esto considerando que en la región latinoamericana -sólo en aquellos países donde existió o existen mujeres en puestos políticos de toma de decisiones- hubo un verdadero avance en materia de “mujer, paz y seguridad” y la aplicación efectiva de la Resolución 1325 a través de la elaboración de sus respectivos Planes de Acción, es el caso de Chile con su ex ministra y ex presidenta Michelle Bachelet, y Argentina con su ex ministra Nilda Garré y con la actual presidenta Cristina Fernández.

Por otra parte, a pesar de que en todos los países estudiados se cuenta con marcos normativos e institucionales en materia de equidad de género y reivindicación de los derechos de las mujeres en cada uno de los ámbitos estatales; a excepción de Argentina, en ninguno de ellos se observa referencias específicas tanto políticas y normativas en el tema de “mujer, paz y seguridad”. De manera general el tema es reducido a las Fuerzas Armadas y específicamente a las misiones de mantenimiento de paz. No obstante, en estas misiones el número de mujeres participantes sigue siendo muy bajo y no existen mecanismos institucionales para incrementarlo, pudiendo ser una alternativa novedosa la aplicación de mecanismos de discriminación positiva, que en este caso ayudarían no solo a implementar una verdadera política de equidad de género, sino también a la modernización de la propia institución militar.

Finalmente, en la mayoría de los países estudiados las autoridades políticas e institucionales confiesan un total desconocimiento de la Resolución 1325, ello implica que a pesar de que el tema “mujer, paz

y seguridad” ostenta por sí mismo una importancia fundamental, el respaldo que tiene al ser parte de una Resolución específica de NNUU se pierde en buenas intenciones al no ser difundida tanto por la misma NNUU como por sus países miembros. En este escenario, es muy difícil el diseño y la implementación de un Plan de Acción sobre esta Resolución, así como el diseño de una política de equidad de género que incorpore los temas de paz y seguridad, tomado en cuenta su importancia y su aplicación, tanto en términos cuantitativos como cualitativos.

Importancia regional y desafíos de la Resolución 1325


En América Latina, la Resolución 1325 tiene una importancia fundamental porque inaugura el debate de la relación “mujer, paz y seguridad” y porque aborda el tema de género desde dos perspectivas: primero, la incorporación de una visión de equidad de género en los sectores de defensa y seguridad, ámbito tradicionalmente patriarcal, y segundo, porque a través de esta incorporación promueve una reflexión, tanto política como institucional, sobre el nuevo papel que le toca desempeñar a la defensa y la seguridad, desde una perspectiva democrática de inclusión, diversidad y equidad.

Dado este escenario, los desafíos en el futuro para poder implementar con éxito la Resolución 1325 en todos los países de la región son: a) priorizar la difusión del contenido y los objetivos de la Resolución, tanto por parte de NNUU como por parte de todos los países miembros, haciendo especial énfasis en el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia de paz y seguridad. b) Los países a través de sus respectivos gobiernos y sociedad civil, deberían iniciar un debate sobre una política nacional de equidad de género que incluya los temas de paz y seguridad, lo que necesita contar con voluntad política y mujeres en puestos de decisión que impulsen el

proceso. c) Operacionalizar la política de equidad de género en el ámbito de paz y seguridad en planes de acción específicos, que definan objetivos claros, metas cuantificables y presupuestos definidos, todo esto con el fin de vincular de manera efectiva los objetivos previstos. d) Finalmente, pensar el tema de manera integral, no en la simple incorporación de mujeres a los ámbitos de defensa y seguridad como una reforma por sí misma; sino en el cambio, la

reforma y la transformación de las instituciones de defensa y seguridad como ámbitos que construyan y fortalezcan la equidad.

Sin lugar a dudas, los avances en la equidad de género en los países de la región latinoamericana han sido muchos, no obstante existen todavía ámbitos en los cuáles estos avances son aún muy lentos, especialmente los relacionados con la paz y la seguridad. Tanto los porcentajes de participación de mujeres en instituciones armadas

y en misiones de paz, como su verdadera influencia en la toma de decisiones nos muestra un escenario en construcción, donde en la mayoría de los países todavía está ausente una verdadera voluntad política e institucional que ofrezca a la mujeres la posibilidad no sólo de incorporarse a estos ámbitos institucionales, sino también de pensar el sentido y el rol de estas instituciones en un nuevo contexto democrático de construcción de la paz. 

Women and Peace and Security: UN Resolution 1325

“Women are not at the peace table. We are not there where our commitment to peace, our capacities to find solutions through dialogue, debate, our sensitivities to human needs, human rights are sorely needed. Therefore, we still must press...”

Margarita Chant Papandreou. Greece/U.S.A

Lisa Lachance and Kimberly Inksater

United Nations Resolution 1325 on Women and Peace and Security was ratified by the Security Council on September 30, 2000. The resolution recognizes the specific gendered risks, experiences and impacts of armed conflict on girls and women. It also affirms that it is critical for women and girls to lead and actively participate in humanitarian and peace-building processes during and after armed conflict in order to ensure sustainable peace.

The resolution was built upon key principles set out in various international instruments, including the Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), the Beijing Declaration and Platform for Action, the “Beijing Plus Five” outcome document, and other Security Council resolutions related to armed conflict and protection of civilians. It was considered a milestone resolution as it finally provided a comprehensive multilateral agreement to address the serious and pervasive human rights abuses women and girls faced in conflict situations. Intense advocacy by numerous women’s organizations led to its development and ratification.

The resolution includes a wide range of priority actions. The key provisions of Resolution 1325 call for action from armed actors, Member States, and the UN system to:

- increase participation and representation of women at all levels of decision-making in the UN system and in peacekeeping operations (Articles 1-4),
- increase protection to women from gender-based violence during armed conflict (Article 10),
- ensure a gender perspective in UN programming, reporting and in Security Council missions and UN peace support operations (Articles 14, 15),
- integrate a gender perspective and attend to women’s and girls’ particular needs in peacekeeping, peace negotiations and post-conflict processes and implementation of peace agreements (Articles 5, 8, 12, 13), and
- prosecute crimes against humanity, genocide and war crimes, including those involving violence against women and girls (Article 11).

Advances and Challenges

Resolution 1325 provides a framework for UN Member States, UN operations, and non-state actors, including armed actors and women’s organizations, to undertake advocacy, policy and operational efforts related to women, peace and security. In 2010, to mark the 10th anniversary of Resolution 1325, the UN organized meetings coined “open days” in conflict-affected countries and subsequently produced a report based on the advances and challenges in the implementation of the resolution as identified by civil society and UN leaders.

The report, Women Count for Peace, notes an increased number of women in decision-making roles in post-conflict countries and within the UN itself. For example, there has been an increase in women deployed as directors, police officers and civilians in peacekeeping

missions. Some progress has also been made in attending to women's specific needs. For example, in the past, large Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programs, such as the one implemented in Sierra Leone, were criticized for not adequately addressing the situation of women and girl combatants. Nevertheless, since the adoption of Resolution 1325, there has been increased recognition of this vacuum and attempts have been made to include gender-specific components in these demobilization processes.

Still, the report notes that very few women have participated in peace negotiations and few peace agreements (post 2000) include provisions to address the needs of women and girls. Post-conflict needs assessments, conducted in the context of peace-building operations, generally integrate a gender analysis. However, the financial resources allocated for women's specific recovery needs, prosecution of gender-based violence, gender equality, or women's empowerment represent less than 8% of total budgets.

In addition, several major armed conflicts in the new millennium have been characterized by egregious human rights abuses, including the use of gender-based violence as a weapon of war by armed actors (e.g. in the Democratic Republic of Congo) and limited participation of women in peace-making and peace-building operations (in countries such as Afghanistan and Iraq). The international community has reaffirmed its concern for women's peace and security in subsequent Security Council resolutions. For example, Resolutions 1820 (2008), 1888 (2009) and 1960 (2010) address sexual violence against women in situations of armed conflict while Resolution 1889 (2009) endeavours to promote increased participation and leadership of women in conflict prevention and peace-building initiatives.


Implementation and Accountability Mechanisms

In 2005, the first two-year System-Wide Action Plan on the Resolution was developed to bring some coherence to UN actions supporting Resolution 1325. The UN Secretary General also called on Member States to prepare action plans to set out how their governments will support the implementation of policies and operations identified in the resolution. However, the use of the Action Plan as a tool to implement the resolution has been limited in that, as of 2010, 19 countries had developed National Action Plans. Some of those countries with Action Plans include post-conflict countries such as Liberia, Sierra Leone and Uganda.

In 2010, the secretary general proposed 26 performance indicators to track the implementation of Resolution 1325 at a global level. In turn, these indicators can be applied to national Action Plans to demonstrate advances related to concrete steps taken on the prevention of gender-based violence, protection of women and girls in armed conflict, promotion of women's participation and representation, and attention to women and girls in relief and recovery operations.

Remaining Challenges

It has been twelve years since the ratification of Resolution 1325. But the resolution and other peace-building initiatives face important challenges to address women, peace and security. These challenges include:

- the limited number of women appointed to leadership roles within UN, in peacekeeping operations, and post-conflict or reconstruction negotiations, despite recent progress,
- continued gender-based violence in conflict and fragile states,
- the perpetuation of sexual exploitation by UN personnel in conflict or post-conflict settings, and
- the absence of gender analysis in fragile states literature and the impact of armed conflict on women, children and men. 

Women Peace and Security Resources

General Information about UN Resolutions on Women, Peace and Security:

[About Women, Peace and Security](#)

[From the Charter to Security Council Resolution 1325](#)

[National Action Plans and Strategies on Women, Peace and Security](#)

Reports on Resolution 1325:

[National Implementation of Security Council Resolution 1325](#)

[Ten Year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325 \(2000\) on Women, Peace, and Security in Peacekeeping](#)

[National Implementation of Security Council Resolution 1325 \(2000\) in Latin America: Key Areas of Concern and Model Plan for Action](#)

[High -Level Policy Dialogue \(HLPD\) on National Implementation of Council Resolution 1325 \(2000\) in Latin America and the Caribbean](#)

United Nations Resolutions on Women, Peace and Security:

[Resolution 1325 \(2000\)](#)

[Resolution 1820 \(2008\)](#)

[Resolution 1888 \(2009\)](#)

[Resolution 1889 \(2009\)](#)

[Resolution 1960 \(2010\)](#)

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Apuntes sobre su implementación en Colombia

Paola Jiménez

La Resolución 1325 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000 constituye un referente de derecho internacional fundamental en contextos que, como el colombiano, se encuentran atravesados por un conflicto armado. La particular relevancia de la Resolución en Colombia se explica por el especial reconocimiento y protección que ordena para las mujeres que han sido afectadas por el conflicto y por su llamado a reconocer el papel de liderazgo que juegan en la construcción de la paz y a garantizar su participación en los escenarios y procesos de toma de decisiones en materia de seguridad y políticas de paz. Es desde estas dos dimensiones: la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto y su participación activa en los procesos e instancias para la consecución de la paz, que pueden entenderse los esfuerzos de discusión, seguimiento, difusión y promoción de espacios y alternativas para su implementación que vienen adelantando múltiples organizaciones de mujeres, agencias estatales y entidades internacionales en Colombia.

Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad y claves para la comprensión de su pertinencia

Un punto a resaltar antes de indicar algunos aspectos sobre la implementación de la Resolución 1325 en Colombia es la importancia de implicar en el análisis el conjunto de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad en las cuales se inscribe. En efecto, la 1325 es la primera de una serie de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el liderazgo de las mujeres en los procesos de paz (Resoluciones 1325 de 2000 y 1889 en el año 2009) y sobre la prevención y respuesta frente a la violencia sexual (Resoluciones 1820 de 2008, 1888 de 2009 y 1960 de 2010), las cuales ilustran un reconocimiento paulatino de los efectos de los conflictos armados sobre las mujeres y de cómo la vulneración sistemática de sus derechos puede convertirse en una amenaza para la paz y la seguridad.

En este reconocimiento son protagonistas mujeres de diversas latitudes, quienes se congregaron en torno a la necesidad de contar con un instrumento en las áreas de seguridad nacional y políticas de paz, y lograron un eco en los representantes de diversos gobiernos. Desde esta dimensión de la Resolución 1325, se señala un espíritu inicial que marcó su origen y que no se limita a buscar hacer de la guerra una situación más humana para las mujeres sino a demandar su participación en los niveles más altos de decisión, para lograr superar la condición de guerra.

En Colombia, la apropiación de la Resolución 1325 se explica en buena medida por la acción de múltiples organizaciones que buscan el reconocimiento de los efectos del conflicto sobre la vida de las mujeres a través de informes, testimonios, investigaciones y movilizaciones que evidencian su rechazo a la confrontación armada por sus devastadoras consecuencias sobre sus cuerpos, sus hijos y sus comunidades. Las mujeres en Colombia demandan hoy que su experiencia y liderazgo sean reconocidos en los procesos para la consecución de la paz. Gracias a estos esfuerzos, acompañados por la comunidad internacional y por agencias estatales, cada vez es más visible la variable de género en el impacto del conflicto armado, las necesidades específicas de las mujeres, así como sus experiencias de resistencia, organización comunitaria, construcción y movilización por la paz.



Sobre la Autora

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia y máster en sociología del derecho del Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Su desempeño profesional se ha enfocado hacia el trabajo con organizaciones de mujeres, comunidades urbanas, campesinas, indígenas y afrodescendientes en Colombia y Centroamérica, asesorando la formulación y ejecución de iniciativas de participación con un énfasis especial en el tema de derechos de las mujeres. Fue Directora de la Red de Justicia Comunitaria y Tratamiento del Conflicto y Oficial de Programa para Derechos de las mujeres del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ha trabajado igualmente para ONU Mujeres en Colombia y cuenta con experiencia docente, académica e investigativa en el tema de género, derechos humanos y derechos de las mujeres.

Partiendo de los mandatos de la Resolución 1325, las claves para comprender su pertinencia y relevancia en Colombia y examinar los avances y retos para su implementación comprenden, en este sentido, al menos cuatro aspectos medulares: 1). La participación de mujeres en los escenarios y mecanismos de toma de decisiones sobre la paz y la seguridad; 2) El reconocimiento y atención de las necesidades específicas de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual o cualquier otra índole; 3) La necesidad de poner fin a la impunidad en los delitos relacionados con actos de violencia contra mujeres y niñas; y 4) La incorporación de una perspectiva de género en las operaciones humanitarias realizadas en terreno.

Debates en torno a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Un aspecto fundamental a resaltar, a pesar de la existencia de un consenso sobre su pertinencia, se refiere a posiciones divergentes desde el gobierno y desde la sociedad civil que han tenido un impacto en las posturas frente a la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas divergencias se evidenciaron particularmente durante los ocho años de gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2008) y se enmarcan en discusiones de mayor amplitud en torno a las políticas de paz y seguridad implementadas a nivel oficial.

Es importante señalar que estas discusiones han sido el punto de quiebre para la expresión de posturas encontradas entre el gobierno y la sociedad civil, no solo en torno a los derechos de las mujeres, sino en general a las más diversas cuestiones sobre derechos humanos: mientras los sectores mayoritarios de las organizaciones sociales y del movimiento social por la paz insistieron en que Colombia transita por un conflicto político, social y armado, el gobierno estableció en sus directrices para el tratamiento de estas cuestiones la existencia de una amenaza terrorista.

Otro punto en el debate, con impacto en las posturas sobre la Resolución 1325, fueron los diálogos de paz con grupos paramilitares que se inician el año 2003 en Santafé de Ralito. En este caso, se evidenció una fuerte reticencia de algunas organizaciones de mujeres a considerar la Resolución 1325 como un instrumento pertinente dentro de una lógica de posconflicto, dada una crítica general a las negociaciones y al llamado “proceso de justicia y paz” con el cual se dio un referente jurídico al proceso. Las críticas de las organizaciones de mujeres, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, señalaron que este proceso, lejos de constituir un mecanismo de justicia transicional, garantizó la impunidad de los crímenes cometidos por los grupos paramilitares y, particularmente, los crímenes cometidos contra mujeres y niñas.

Un tercer aspecto que llevó a algunas organizaciones de mujeres a tomar una posición crítica frente a la manera en que el gobierno asumió su responsabilidad en la implementación de la Resolución, lo constituye el argumento del mínimo margen que durante estos ocho años del periodo de Uribe Vélez se dio a la posibilidad de una salida política y negociada al conflicto armado. Este punto es también la evidencia de un fuerte distanciamiento entre las consignas de las organizaciones de derechos humanos y en general de las organizaciones sociales y la política de seguridad democrática del gobierno anterior.

Al margen de estas diferencias, que muestran cómo en el debate sobre la Resolución 1325 se involucran cuestiones álgidas sobre seguridad nacional y políticas de paz, las expresiones de voluntad y la insistencia en su relevancia para Colombia por parte de diversas agencias estatales y de las organizaciones de mujeres constituyen un factor crucial para avanzar en su implementación.

Estas expresiones se evidenciaron particularmente durante las diversas actividades de conmemoración de los 10 años de la Resolución, en los que las agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y las entidades de cooperación jugaron un papel importante en la generación de espacios de diálogo y encuentro entre el Estado y la sociedad civil y las organizaciones de mujeres aportaron elementos fundamentales fruto de diálogos previos e investigaciones sobre la obligatoriedad de la Resolución, estrategias de exigibilidad e indicadores de seguimiento. El gobierno colombiano, a la cabeza del Presidente Juan Manuel Santos a partir de agosto del año 2010, con la vocería de su vicepresidente, Angelino Garzón, propuso la conformación de un equipo de seguimiento a la implementación de la Resolución que, de concretarse, constituiría un hito en los avances que de manera general se indican a continuación.

Implementación de la Resolución 1325 en Colombia: algunos avances

Uno de los avances más significativos hacia la implementación de la Resolución se encuentra en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. Esta jurisprudencia que, desde la expedición de la Constitución de 1991 se reconoce como una herramienta clave para la protección de los derechos en Colombia, ofrece dos sentencias que reflejan en sus mandatos aspectos clave de la Resolución 1325 y en cuya aplicación podría encontrarse un avance importante.

Estas dos sentencias desarrollan claramente el llamado a reconocer y atender de manera apropiada las necesidades específicas de las mujeres víctimas del conflicto armado. De una parte, el auto 092 de 2008, emite un mandato para que las entidades encargadas de atender a la población víctima del desplazamiento forzado

incorporen las necesidades específicas de las mujeres. De otra parte, la sentencia T-496 de 2008, ordena la incorporación de la perspectiva de género en los programas de atención a víctimas y testigos en el marco de los procesos judiciales que se adelantan con ocasión del proceso de paz con los grupos paramilitares.

Un segundo aspecto, resaltado por la Corporación Humanas en su estudio “Diez años de la Resolución 1325 en Colombia” publicado el año 2010, remite a las múltiples iniciativas de las organizaciones y la comunidad internacional que apoyan los esfuerzos de construcción de paz de los grupos de mujeres, que alientan su participación en políticas públicas sobre paz y seguridad, y que buscan concretar medidas de justicia para víctimas del conflicto a través de estrategias de representación de casos, apoyo psicosocial y alternativas de judicialización y reparación.

Un último aspecto a resaltar lo constituye la incorporación de una perspectiva de género en la recientemente expedida Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: un ambicioso dispositivo legal con el cual el Estado colombiano pretende aplicar una serie de medidas de reparación, restitución y satisfacción, entre otras, a favor de quienes han resultado víctimas del conflicto armado a partir del año 1985. Esta ley incluye en sus mandatos una protección especial a las mujeres víctimas y, en materia de restitución de tierras, establece un tratamiento preferencial, un criterio de prelación de las solicitudes de las mujeres cabeza de familia y prioridad en el otorgamiento de beneficios tales como créditos, seguridad social y educación.

Sobre el impacto de estos y otros avances jurídicos tendrá mucho que decir la aplicación de unos indicadores y un mecanismo de seguimiento en el marco de un plan de acción para la implementación de la Resolución 1325 en Colombia. Esta alternativa de implementación, que se ha aplicado en otros países, ha sido identificada como una opción viable e importante en Colombia y aún se encuentra pendiente su concreción.

Canada's Action Plan for the Implementation of UN Security Council Resolutions on Women, Peace and Security

Stephanie Tissot

After 2000, United Nations member states were urged by the Security Council to develop action plans for implementing UN Security Council Resolution 1325. In October 2010, **Canada's Action Plan** was announced. The Action Plan examines the impact of national laws, policies and programs, in Canada and abroad, in order to understand how they can provide equal benefit to, and promote the active and meaningful participation of, women and girls, in peace processes. It recognizes the needs of women and girls affected by conflict and draws upon their particular knowledge and skills to implement policies and projects. The Action Plan covers the period until March 31st, 2016, and is evaluated by the **Standing Senate Committee on Human Rights**.

According to the Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT) Canada's Action Plan is pursued on a variety of fronts that include: advancing international norms and standards; advocacy in international fora; promoting mechanisms for accountability and implementation of Resolution 1325; engaging Canadian, international and local civil society organizations; and building knowledge and skills for practitioners. The set of indicators used in the plan are:

- **“Prevention** – integrating a perspective that takes into account the differential experiences of men and women, boys and girls in conflict situations into all conflict prevention activities and strategies; strengthening efforts to prevent violence”
- **“Participation** – advocating for the active and meaningful participation and representation of women and local women's groups in peace and security activities”
- **“Protection** – protecting women's and girls' human rights by helping to ensure their safety, physical and mental health, well-being, economic security, and equality; promoting and protecting the security and rights of women and girls”
- **“Relief and recovery** – promoting and working to ensure women's equal access to humanitarian and development assistance, promoting aid services that support the specific needs and capacities of women and girls in all relief and recovery efforts.”

The Action Plan also includes key strategies for the implementation of the resolutions on women, peace and security, which include:

- training Canadian personnel on gender-differentiated analysis and programming,

- applying gender analysis to situations of fragile states, armed conflict, and peace operations in order to gain a better understanding of the distinct dimensions and the implications on women and men, girls and boys,
- development of policies and programs that respond to the particular needs and experiences of women and girls in peace operations, fragile states, and conflict-affected situations,
- developing and implementing accountability mechanisms for Canadian government departments.

Review of Canada's Action Plan: Challenges and Observations

The Standing Senate Committee on Human Rights periodically calls witnesses to provide evidence of Canadian government activities related to the implementation of Resolution 1325 and other international commitments. The most recent review by the Committee occurred earlier this month (March, 2012). **Colleen Duggan**, senior program specialist at the **International Development Research Centre (IDRC)**, provided evidence to the Committee highlighting IDRC's action-research in various countries affected by armed conflict. (See **video clips** of Ms Duggan's testimony as well as the **evidence** provided by other organizations.)


Previously, in November 2010, the Standing Senate Committee on Human Rights published a **report** that examined and monitored issues related to the UN resolutions on women, peace and security. It reviewed Canada's international and national human rights obligations, as well as the newly published Action Plan. In that 2010 report, the Committee recognized that Canada had carried out important initiatives and demonstrated leadership on the women, peace and security agenda since 2000. For example:

- Canada co-funded a conference to examine how military and police personnel can address issues of sexual violence in wartime, and women, peace and security issues more generally. An inventory of good practices was developed, and the work of this seminar fed into the process that led to the Security Council's adoption of Resolution 1820.
- Canada helped to create and continues to be an active member of the Group of Friends of Women, Peace and Security in New York. The group brings together like-minded states to discuss and coordinate positions on issues pertaining to women, peace and security and to keep pressure on the UN system to implement resolution 1325.

- Canada also facilitated the involvement of Darfuri women in the peace talks that were held in Abuja from 2004 to 2006.
- Canada held a workshop to help the government of Sierra Leone develop its national action plan on Resolution 1325, encouraging the incorporation of gender perspectives into the plan.
- Canada supported the formation of women-led community peace groups in Nepal and deployed gender advisers to the Ministry of the Interior in Afghanistan.

However, the Committee also highlighted important challenges. For example, it noted that in order to effectively implement the Action Plan, Canada's international policies need increased cohesion and mutual reinforcement to ensure clear coordination mechanisms amongst government departments as well as open channels to share specialized expertise and knowledge. Furthermore, an implementation plan, a budget, and a schedule subject to regular review should be included as key components in this process.

The Committee also observed a lack of analysis of the key problems in implementing the women, peace and security resolutions. Furthermore, a baseline study had not been conducted to illustrate the starting point for each indicator. These indicators should be measured through qualitative as well as quantitative methods given that women's experience and participation in armed conflict and peace processes are not always easily understood or measured by quantitative indicators alone.

While the Committee recognized Canada's efforts to advance the protection of men and women in fragile and conflict states, it also urged the government to focus on enabling women to be decision-makers in matters of peace and security, building gender-sensitive peace and security architecture, and strengthening justice institutions. 

Links to more information on Canada's work on Resolution 1325:

[Canada's Action Plan for the Implementation of United Nations Security Council Resolutions on Women, Peace and Security](#)

[Government of Canada Response to request for information by UN Secretary-General concerning full implementation of Security Council Resolution 1325 on women, peace and security](#)

[Women, Peace and Security: Canada Moves Forward to Increase Women's Engagement. Standing Senate Committee on Human Rights, November 2010](#)

Application of UN Resolution 1325 in the occupied Palestinian territories

Khadeja Husain Nasr Barghouti

Palestinian women continue in their struggle for political participation, non-discrimination, and gender equality. Women have actively participated in numerous advocacy campaigns to strengthen their political involvement and achieve gender equality in a dual struggle for liberation: to end the occupation and to end the discrimination and marginalization resulting from a patriarchal society.

Palestinian women have participated in national action through national liberation movements and national political parties in order to achieve the overall goal of self-determination and statehood. They have participated in a dynamic way despite their perceived “secondary” role in society. The women’s movement to end the occupation included housewives, students, politically involved women, and women leaders of institutions and Palestinian centers. Women’s participation was important due to its collective nature: women from different geographical, political and social backgrounds worked together for change. This was a struggle that united Palestinian women at home, in the work force, and abroad.

Palestinian Women in the Current Context

The 1993 Oslo Agreement between Israel and the Palestinian Liberation Organization (PLO) established the Palestinian National Authority (PNA) resulting in a shift in Palestinian women’s avenues of resistance. Women began to mobilize to demand their rights within the concept of citizenship in relation to the newly created PNA government. Palestinian women adopted a rights discourse and focused on legal advocacy, including legislative initiatives, to promote change.

For example, the women’s movement adopted programs aimed at reducing violence against women to end discriminatory patriarchal culture. Palestinian women succeeded in increasing the number of women in senior government positions and non-government organizations. The women’s movement has also been successful in addressing issues of violence against women in the public realm. They challenged the cultural taboo around sexual violence within the family and advocated for legislative amendments to ban “honour killing” as a legal defense, among other changes that will provide legal protections to women.

At present, Palestinian women represent 7.5% of the members of the National Council which translates to 56 out of 744 members. In the Central Council, there are

5 women out of 124 members. In 2009 a woman was appointed to the Executive Committee of the PLO for the first time, and that same year the first woman was appointed as the head of the Capital Market Committee. In 2010, a woman was appointed as a governor of the Province of Ramallah and Al-Bireh for the first time. In 2011 the first woman was appointed Director of the Palestinian Central Bureau of Statistics.

In addition, the percentage of women’s representation in decision-making positions in public offices is negligible compared with the representation of men. For example, 4% of assistant undersecretaries (in public institutions) are women and women working in public sector jobs totaled 31% of the workforce (Palestinian Central Bureau of Statistics, 2009).

The National Palestinian Coalition on Resolution 1325

The United Nations Resolution 1325 on Women and Peace and Security became an important mechanism for Palestinian women after its recognition by the PNA in 2006 and the creation of the International Women’s Commission for a Just and Sustainable Peace between Israel and Palestine (IWC).

On the Palestinian level, the provisions of the resolution meet with the general objectives of the Palestinian women’s movement. The importance of the Resolution in Palestine comes from the particular situation of Palestinian women as they live in the center of two discriminatory realities: that of the Israeli occupation with its physical and psychological violence, and that of male domination, which inhibits full the equality of women as guaranteed in the Palestinian Declaration of Independence and the Palestinian Basic Law.

Still, after nearly six years since the PNA recognized Resolution 1325, Palestinian women have not taken full advantage of the Resolution in their dual struggle to end occupation and promote women’s equality. However, it has been used by Palestinian women’s organizations as an international reference to demand that the PNA strengthen the role of women in peacemaking and increase their political participation in various PNA and PLO committees as well as official delegations and negotiations.


In 2011, in an effort to benefit from the provisions of the resolution, Palestinian women announced the formation of the Palestinian National Coalition on Resolution 1325. This movement is a result of Palestinian women’s conviction that much should be done to strengthen



the PLO and Hamas. On the other hand, Palestinian women have realized that they have not achieved sufficient success in breaking the glass ceiling and their participation in crucial national issues remains weak despite their social activism.

Palestinian women can take advantage of the breadth of the resolution as it calls on action from various actors involved in armed conflict, not only formal Member States of the United Nations. Its provisions respect the strength of women of the world. The international scope of the resolution allows for the possibility of organizing coalitions and developing women's networks that press towards its enforcement in other countries and among people who suffer the absence of peace as well as in countries where women suffer from marginalization and isolation.

The Benefits of Resolution 1325

The adoption of the resolution in Palestine and the formation of a Palestinian National Coalition on Resolution 1325 will expand opportunities for Palestinian women to reform the national situation while at the same time permitting the integration of elements of the Palestinian women's movement. Resolution 1325 is an opportunity to unite efforts and revive national action by Palestinian women. It is also an international reference to hold the Israeli occupation responsible for actions that harm Palestinians in general and women in particular. The Coalition has advocated for protection, participation, and international monitoring of the situation in the occupied Palestinian territories. The resolution presents an opportunity for women to promote peace within the Palestinian context as it relates to the internal split between the West Bank and Gaza and women's need for protection and security under Israeli occupation. 

the role of women in the national context. After the establishment of the PNA, women's initiatives turned away from participation in national political parties toward legal and social advocacy. Women's rights organizations stepped up their efforts for equality and centralized their work; however, this also isolated the organizations from national politics and grassroots women. This change from political activism to legal advocacy dwarfed the role of women, isolated them from concerns and issues facing the Palestinian people as a result of the Israeli occupation and limited the role of women in the PNA. A gap between the national women's movement and elite women widened after the establishment of the PNA, thus limiting a gender and feminist analysis of national issues such as the situation of female prisoners, displaced women, and women whose social and economic lives are threatened by the Wall (the separation barrier constructed by Israel). The Coalition on Resolution 1325 provides an effective tool to bridge the gap between grassroots women and women's organizations and to study the effects of the occupation on women's daily lives.

Other developments have taken place in the Palestinian political arena that Palestinian women had to address. On a positive note, women successfully claimed their political role in the formation of negotiation committees and other committees that monitor national reconciliation between



About the Author

Khadeja Husain Nasar Barghouti is a lawyer and a researcher in law, human rights and gender. She holds a Masters in Law from the University of Damascus, in Syria and a Masters of Arts in Gender and Development, from Birzeit University, in Palestine. To prepare this article, Khadeja conducted an interview in Ramallah with Haitham 'Arar, coordinator of Palestinian National Coalition on Resolution 1325.

Just Governance Group News

Farewell to Javier Soto, Research Intern

The Just Governance Group would like to recognize the important work of Javier Soto in the production of our knowledge bulletins, Multiples and Co-Praxis. Javier has worked as a research intern since September 2011 and is completing his internship at the end of March. Javier is a graduate student at the Universidad Javeriana and is returning to Colombia to finish his Master's thesis, which explores Colombia's armed and political conflict and strategies for effective conflict resolution. The JGG community thanks Javier for generously volunteering his time and looks forward to future collaboration in Colombia.



Stephanie Tissot, former intern, now working as full-time junior consultant and assistant

JGG introduces Stephanie Tissot as a full-time staff supporting the Group's consulting and knowledge sharing function. Stephanie, originally from Colombia, is a recent graduate of the Norman Paterson School of International Affairs in International Development and Conflict Management. She worked as an intern for the Group in 2011. Stephanie will be assisting JGG with business development as well as research support on consulting projects, and she will support the development of JGG knowledge products in close collaboration with JGG consultants and our global learning community.

JGG-CANADEM consortium to evaluate Electoral Processes Programme

JGG and CANADEM were awarded a contract to evaluate the Electoral Processes Programme of the International Institute of Democracy and Electoral Assistance. This consultancy will include the evaluation of International IDEA's Electoral Processes activities, partnerships and results achieved, measured against their strategic plan. The work will be conducted between March and the end of September, 2012.

JGG Strategy on Corporate Social Responsibility

A number of consultants in JGG's community of practice have experience in issues related to local economic development and Corporate Social Responsibility (CSR) in the context of international development cooperation. In order to clarify its approach to CSR the Group has developed a strategy which sets out the international knowledge and policy framework for CSR, observations resulting from our consultants' experience, and JGG's approach to CSR in the development context. JGG will provide services to development agencies that integrate a human rights-based approach and a conflict sensitive lens.

JGG Good Practices and Key Factors in Human Rights Impact Assessments (HRIAs)

Two senior consultants in JGG's core group have designed HRIA methodologies and conducted Human Rights Impact Assessments. Due to international recognition of the impact that trade agreements and business operations have in the enjoyment of human rights, JGG has developed a summary briefing note on key factors to consider in HRIAs.

JUST GOVERNANCE GROUP Contact Information

Kimberly Inksater, Director:
kj.inksater@justgovernancegroup.org
Elaine Bruer, Corporate and Office Manager:
e.bruer@justgovernancegroup.org
Carmen Beatriz Ruiz:
cb.ruiz@justgovernancegroup.org
Stephanie Tissot, Junior Consultant:
s.tissot@justgovernancegroup.org

Physical Address: 858 Bank Street, Suite 107A,
Ottawa, Canada.

Mailing Address: 406 Sunnyside Avenue
Ottawa ON K1S 0S7
Canada

Skype: JustGovernanceGroup

Tel: 613-729-5612

Fax: 613-729-1085

info@justgovernancegroup.org

www.justgovernancegroup.org